

AMÉRICA DEL SUR
Andrés Mego desde Lima

IIRSA, la integración incompleta

Iniciativa pone en peligro ecosistemas y pueblos indígenas.

“Las formidables barreras naturales tales como la Cordillera de los Andes, la selva amazónica y la cuenca del Orinoco” son el principal problema para posibilitar la integración física del continente y, en consecuencia, potenciar el comercio regional, señala el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado “Nuevo impulso a la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur”, elaborado en el 2000.

Ese mismo año, durante la I Cumbre Presidencial Sudamericana, realizada en Brasilia a instancias del entonces presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), coincidentemente se identificó la fragmentación de la infraestructura física como un obstáculo principal para la competitividad comercial de la región. Como

solución, se acordó el desarrollo de una estrategia con miras a interconectar las infraestructuras nacionales.

Ese es el origen de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), estrategia continental para impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura en los rubros de energía, transportes y comunicaciones.

Posteriormente, durante la III Cumbre Presidencial Sudamericana realizada en diciembre del 2004 en la ciudad peruana del Cusco (*NA, Dic. 15, 2004*), la IIRSA fue confirmada como componente importante de la estrategia de integración política y económica regional.

Los presidentes de las 12 naciones sudamericanas aprobaron la Agenda Consensuada, una cartera de 31 proyectos de inversión de gran escala, considerados estratégicos, a realizarse en el periodo 2005/2010, por un costo aproximado de US\$6.4 millardos.

Si bien la IIRSA, que entró en implementación en el 2005, también responde al legítimo reclamo de los pueblos por mejores vías de comunicación y podría estimular la reducción de la pobreza, aquella percepción de la naturaleza como “barrera” es una de las principales críticas que la sociedad civil organizada hace a la iniciativa.

“Dentro de la IIRSA, la Amazonia está siendo vista como una gran posibilidad de unir a los países que siempre vieron a la selva como un obstáculo”, afirma Elisangela Soldatelli Paim, coordinadora de proyectos del Núcleo Amigos de

la Tierra de Brasil. “Sin embargo, la lógica de la iniciativa está basada meramente en la integración física y comercial apuntando a la explotación del patrimonio natural del continente”.

Potenciales impactos

El biólogo estadounidense Timothy J. Killeen, en su estudio titulado “Una tormenta perfecta en la Amazonia”, sostiene que “una iniciativa visionaria como IIRSA debería ser también visionaria en todas sus dimensiones e incorporar medidas para asegurar que los recursos renovables de la región sean conservados y las comunidades tradicionales fortalecidas”.

La IIRSA ha sido diseñada sin considerar adecuadamente sus potenciales impactos ambientales y sociales, lo que la convierte en una amenaza latente sobre los ecosistemas y las culturas aborígenes. Considerando que la mayoría de megaproyectos se están llevando a cabo en espacios naturales, como la Amazonia, extremadamente vulnerables al cambio, el componente ambiental debe ser prioritario.

Uno de los megaproyectos definidos en la Agenda Consensuada de IIRSA es el Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, o Carretera Interoceánica Sur, cuyo asfaltado en el Perú se inició en el 2005 a un costo de más de \$1 millardo, y que posibilitará el acceso de los estados brasileños de Acre y Rondônia a

IIRSA: Ejes de integración y desarrollo



AMÉRICA DEL SUR	1
IIRSA, la integración incompleta	
PERÚ	3
Esclavas modernas	
AMÉRICA LATINA	4
Entrevista con politóloga Kristen Sample	
ARGENTINA	5
Tregua a conflicto agrario	
BOLIVIA	6
Corrupción, ¿mal endémico?	
GUATEMALA	7
VIH gana batalla	
HAITÍ	8
Violentas protestas	
DOSSIER DESGLOSABLE:	
Biocombustibles hipotecan futuro	
AMÉRICA LATINA	i
Biocombustibles: ¿Realmente viables?	
BRASIL	iii
Líder en producción de etanol	
ARGENTINA	iv
Biocombustibles acaparan tierras	

MÉXICO

Galardón ambientalista.

La Fundación Selva Negra, organización ambientalista creada por la banda mexicana de rock Maná, recibió el 7 de abril —Día Internacional de la Salud— el galardón de “Campeón de la Salud de las Américas” otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Con este premio la OPS reconoce los esfuerzos de la Fundación Selva Negra en la conservación medioambiental y el desarrollo social, aspectos relacionados al tema central del Día Internacional de la Salud este año, “Proteger la salud frente al cambio climático”.

La Fundación Selva Negra, creada en 1995, desarrolla proyectos en México y varios países latinoamericanos relacionados con reforestación de bosques, protección de especies en peligro, iniciativas de reciclaje y de educación ambiental, además de brindar apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales.

Uno de sus proyectos más recientes es impulsar la construcción y mantenimiento de pequeñas huertas familiares sostenibles y de alto rendimiento que faciliten la conservación de agua y mejoren la nutrición, especialmente de niños y mujeres. Esta iniciativa se está llevando a cabo en 11 países del mundo, incluidos Haití, México y Nicaragua. —NA.

los puertos del Pacífico (NA, Dic. 28, 2005).

Los tramos más problemáticos de este megaproyecto se desarrollan en el departamento amazónico peruano de Madre de Dios, donde ya existe un pasivo social y ambiental significativo, causado por la minería informal y la tala desmedida. A pesar de que Madre de Dios es el departamento con más áreas protegidas del Perú, la presencia del Estado es sumamente débil. El experto en temas ambientales Marc J. Dourojeanni, autor de “Estudio de Caso sobre la Carretera Interoceánica en la Amazonia Sur del Perú”, advierte que de continuar esta situación, impactos como la deforestación, la degradación de bosques y la invasión de áreas protegidas y tierras indígenas, entre otros, acelerarán su gravedad después del asfaltado. Sin embargo, según Dourojeanni, “la principal objeción a la obra no se refiere directamente a ella, sino a la falta de mecanismos públicos que permitan evitar los impactos previstos, e impulsar el desarrollo sostenible”.

Posiblemente el más polémico de todos los proyectos IIRSA es el que se ejecutará en el territorio brasileño: las hidroeléctricas del río Madeira. Este megaproyecto de energía ya cuenta con licencias ambientales del gobierno y ya se dio en licitación para su construcción, pero arrastra consigo muchas críticas del sector ambientalista.

El río Madeira es el principal afluente del Amazonas, y por lo tanto el impacto de una represa puede ir mucho más lejos del área circundante. Por otra parte, como el proyecto se ubica muy cerca de Bolivia, el gobierno del presidente Evo Morales ha protestado por posibles inundaciones que podrían traspasar la frontera.

Una recomendación clave en el análisis de Killeen es que los estudios ambientales de IIRSA deben ser integrales y no simplemente específicos para cada proyecto: “Los estudios deben tener en cuenta los impactos secundarios y acumulativos provenientes de múltiples proyectos, incluidos aquellos financiados por otras agencias y el sector privado”.

¿Subhegemonía de Brasil?

Los antecedentes de la IIRSA se pueden rastrear en los planes que Brasil ha puesto en práctica dentro de su territorio desde 1990 cuando el gobierno federal, con el objetivo de

integrar la Amazonia al espacio productivo brasileño y consolidar la hegemonía política y económica de Brasil en América del Sur, convocó a los estados y municipios a adherirse a planes de desarrollo integrados, llamados Planes Plurianuales (PPA).

Esta iniciativa, conocida como “Avanza Brasil” y posteriormente como “Brasil para todos”, estuvo basada, al igual que la IIRSA, en Ejes de Integración y Desarrollo identificados para incorporar nuevas áreas del país a la dinámica del comercio global.

La experiencia ratificó la estrecha relación entre la economía y las mejoras en infraestructura, y puso en evidencia la necesidad de conectar los estados brasileños amazónicos (Acre, Amazonas y Rondônia), lejanos de los puertos del Atlántico, con el Pacífico a través de sus vecinos Bolivia y Perú.

En la práctica vemos que en la implementación de los megaproyectos IIRSA, la participación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entidad pública asociada con los ministerios de Desarrollo, Industria y Relaciones Exteriores, es fundamental para las compañías brasileñas que operan en países vecinos.

Importantes contratos de proyectos IIRSA han sido adjudicados a consorcios liderados por grandes constructoras brasileñas, principalmente Odebrecht, gracias a que tienen acceso al crédito que otorga el BNDES de acuerdo a su política de promover la exportación de bienes y servicios brasileños.

Al mismo tiempo, otro factor que impulsa a Brasil a lanzar la IIRSA es, como señala el economista peruano Gustavo Guerra García, “la necesidad del gobierno brasileño de contrapesar los efectos negativos del NAFTA [siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio de América del Norte] sobre la exportación de productos manufacturados brasileños”.

“El modelo de desarrollo pretendido por el gobierno brasileño para América del Sur no es otro que el que está en curso en Brasil.”, afirma Jean-Pierre Leroy, miembro de la Red Brasileña de Justicia Ambiental. “¿Se puede hablar de subhegemonía? Es innegable que Brasil, dividido entre sus intereses y su voluntad de integración, se posiciona de modo que su liderazgo en el proceso de integración esté garantizado”. □

CHILE

No a píldora del día después. La presidenta Michelle Bachelet lamentó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que el 4 de abril declaró ilegal la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia, o “del día después”, en servicios de salud públicos, aunque no prohibió su venta en farmacias.

“Lamento profundamente el fallo en un país que aspira estar en las ligas mayores, donde la gente tenga iguales oportunidades de salud, en educación y en desarrollo”, dijo la mandataria. “Esta es una herida a la construcción de una sociedad más equitativa”.

Bachelet resaltó que la decisión afecta a las mujeres más pobres que no pueden comprar el anticonceptivo en las farmacias.

El TC aceptó por cinco votos a favor y cuatro en contra, la impugnación presentada a inicios del 2007 por 31 legisladores de derecha contra el decreto del Ministerio de Salud que contempla la distribución de la píldora de emergencia a adolescentes mayores de 14 años sin consentimiento de sus padres (NA, Abr. 4, 2007).

Los magistrados no aceptaron, sin embargo, pronunciarse sobre otros métodos anticonceptivos. —NA.

Esclavas modernas

Aunque delito está penalizado, trata de personas es tolerada socialmente.

Considerado en el mundo como el tercer delito criminal más importante después del tráfico de drogas y de armas, la trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños se ha convertido en una forma moderna de esclavitud que afecta a 2.4 millones de personas cada año a nivel mundial, y es a la vez un comercio muy lucrativo que genera unos US\$32 millardos anuales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Es una situación global que afecta a casi todos los países. Se ha convertido en un problema internacional y para combatirlo tiene que haber un trabajo coordinado entre las autoridades y los gobiernos del mundo”, advierte Rosa Dominga Trapasso, religiosa estadounidense que llegó al Perú hace más de 50 años y que se ha convertido en la defensora de las mujeres víctimas de trata, a quienes ayuda desde el Movimiento El Pozo, con sede en Lima.

De acuerdo con el informe “Trata de mujeres para fines sexuales comerciales en el Perú”, elaborado en el 2005 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) conjuntamente con el Movimiento El Pozo, en el Perú ocho de cada 10 casos identificados corresponden a situaciones de trata interna.

“Hay una costumbre muy facilitadora de entregar o recibir niñas, niños y adolescentes, cuyos padres no pueden hacerse cargo, que caen —lamentablemente— en manos de traficantes de personas”, señala Tammy Quintanilla Zapata, directora del Movimiento El Pozo.

Sin embargo, el Perú es considerado país de origen, tránsito y destino de trata de personas. Según la OIM, las peruanas son víctimas de este delito al ser enviadas a países de América del Sur (Argentina y Bolivia), Europa occidental (España e Italia), Japón y EEUU con fines de explotación sexual.

Historias dramáticas

Rosa María, una jovencita de 16 años de Yurimaguas, en el oriental departamento de Loreto, vivía con su abuela. Una amiga le ofreció trabajo en una discoteca, se presentó y la llevaron por tierra hasta Chota, en Cajamarca, al norte, donde supuestamente era el empleo. Cuando llegó se dio con la sorpresa de que el trabajo era para prostitución. En un operativo, la Policía la ubicó y fue rescatada por el Movimiento El Pozo.

Otra modalidad fue la utilizada en el caso de María, una joven que viajó a Japón legalmente en busca de empleo. Le ofrecieron trabajar en una fábrica pero fue engañada, la vendieron entre proxenetas, fue secuestrada, prostituida y le quitaron sus documentos. Su padre denunció su desaparición al Movimiento El Pozo. Logró escapar con apoyo de una señora y las autoridades del Consulado peruano en Japón la ayudaron hasta su repatriación, hace cuatro años.

A Rita una señora le ofreció empleo de limpieza en Argentina. Se contactó con los supuestos empleadores que le pagaron el viaje por tierra, pero en el camino descubrió que con ella viajaban muchas otras mujeres jóvenes. Fue llevada a las afueras de Buenos Aires, donde fue encerrada y obligada a ejercer la prostitución. Tras cinco años en cautiverio logró juntar dinero y escapar.

Casos como estos hay miles, pero aún se tiene temor de denunciar a estas redes que operan en discotecas, bares, hoteles de lujo, calles importantes, salones de baile, cuarteles militares, centros mineros, lugares turísticos y zonas de frontera (NA, Abr. 9, 2006).

Avances significativos

En el Perú, tras una lucha de cuatro años, organizaciones no gubernamentales defensoras de la mujer se unieron con organismos del Estado y entidades privadas para crear una comisión multisectorial que impulsó en el Congreso la aprobación de la ley 28950, el 17 de enero del 2007, que castiga con cárcel la trata de personas.

Para la congresista y abogada Rosario Sassieta, primera presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias del Perú, esta ley tiene un avance significativo porque implicó modificar el Código Penal, en la medida que antes la trata no estaba tipificada, y por lo tanto era difícil sancionar a quienes cometían este delito.

La ley establece penas de cárcel de entre 8 y 15 años para quienes promueven el tráfico de trata, y cuando las víctimas son menores de edad y quien promueve el delito es un funcionario público, la sanción va de 12 a 20 años. En caso de muerte o lesión grave, la pena es no menor de 25 años de prisión.

En el Perú está vigente el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2007-2013, a cargo del Ministerio del Interior, en torno a los mecanismos de prevención, implementación de la ley y de asistencia a la víctima a través de una línea telefónica de ayuda. Entre marzo del 2006 y el 2007 se han registrado más de 8,500 llamadas y derivado 60 denuncias a la Policía y Ministerio Público para su investigación.

Sin embargo, hablar de trata en el Perú es muy difícil pues no se tiene mucha información sobre cómo funcionan estas redes y menos aún si hay personas condenadas por este delito.

Sassieta confirma que hay un grave déficit en materia de registro por delito de trata y espera que a partir de la implementación de los procedimientos del Sistema de Registro Estadístico del Delito de Trata de Personas —que ejecuta el Ministerio del Interior—, se pueda ir recogiendo información para reducir la explotación que sufren mujeres y menores.

“Si bien hay muchas banderas que se alzan en Europa para sancionar este delito, el Perú es un país que demuestra extrema tolerancia social hacia situaciones de discriminación de género, muchas de las cuales incurrir en delitos”, dice Sassieta. □

“Partidos tienen que ser más creativos para encontrar mujeres candidatas”

Tres décadas han pasado desde que la democracia empezó a echar raíces sólidas en toda la región. Un elemento de la “ola democrática” ha sido la lucha de las mujeres por estar en pie de igualdad política. ¿Lo han logrado? “Sí y no”, dice **Kristen Sample**, coautora de un reciente estudio sobre mujeres en política en América Latina. “Hay un largo camino que recorrer”.

Sample, oficial superior de programa para la región andina y cuestiones de género del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electora (IDEA Internacional), habló con la corresponsal de NOTICIAS ALIADAS **Barbara Frazer** sobre cuán lejos han llegado las mujeres y los desafíos venideros.



Kristen Sample

Cuatro mujeres han sido elegidas presidentas en América Latina. ¿Es ese un hito?

Si se considera la historia de las elecciones latinoamericanas, cuatro no es un gran número. Lo que es interesante es que dos de ellas [la chilena Michelle Bachelet y la argentina Cristina Fernández] asumieron el cargo en los últimos dos años. También hemos visto gran cantidad de mujeres candidatas de alto perfil que no fueron electas, pero que fueron serias contendoras.

¿Cuáles son los criterios para determinar cuánto han avanzado las mujeres?

Si miramos los números, tendríamos que decir que hay un éxito calificado. En algunos países, en algunas esferas políticas, vemos números significativamente mayores de mujeres en la política. En Argentina, Costa Rica o incluso Perú, en cargos en que hay un cierto número de representantes, como el Parlamento o consejos locales o regionales, vemos un creciente número de mujeres, por encima del 30% en algunos casos.

Pero hay otros casos en los mismos países, en cargos

de un solo representante, como alcalde o presidente regional, en que los números son abismalmente bajos. Luego hay países como Brasil, en que los números son bajos en todos los niveles, y donde sólo 8% de los congresistas son mujeres.

¿Por qué hay tal disparidad?

Para el Parlamento o un consejo municipal o regional, un partido político tiene que presentar [una lista de] candidatos por distrito, y normalmente incluye mujeres. Y a las mujeres normalmente les va bien. En una competencia en que el ganador se lo lleva todo, como alcalde o presidente regional, los partidos no están dispuestos a “arriesgar” ese único cargo por una candidata mujer. En el Perú sólo 5% de los candidatos a alcaldes son mujeres; esto es, sólo una de cada 20 candidatos.

Asimismo, hay enormes discrepancias entre países. Argentina y Brasil tienen leyes de cuotas, pero más de 38% de escaños parlamentarios en Argentina, y apenas 8% en Brasil, son detentados por mujeres.

Si las leyes de cuotas no bastan, ¿qué más debe hacerse?

Hay tres pasos. Primero, asegurar que las mujeres puedan participar y quieran candidatear. Segundo, hay que conseguir que los partidos políticos incluyan mujeres en sus listas, lo cual es un proceso de largo plazo, tratando de que los partidos políticos propicien más la equidad de género. Y tercero, otro proceso de largo plazo, trabajar con el electorado, para que elija mujeres como alcaldesas o presidentas regionales.

¿Cómo pueden los partidos hacerse más propicios a la equidad de género?

Los partidos políticos enfrentan muchos desafíos, no sólo en lo tocante a contactar con las mujeres, sino también con los jóvenes, pueblos indígenas y grupos excluidos en general. Los partidos tienen que ser más proactivos y creativos para identificar posibles candidatas mujeres. Las mujeres son líderes en el servicio social y comunal en las áreas donde trabajan. Las mujeres componen el 50% de las universidades. Las mujeres están haciendo grandes avances en todos los sectores, y sin embargo parece que los partidos políticos son uno de los últimos bastiones de resistencia contra ellas.

¿Cuáles deben ser las prioridades para aumentar la participación política de las mujeres en América Latina?

Lo primero sería la legislación electoral. Se han producido algunos avances en algunos países, pero esto es desigual, y los países que no tienen cuotas han hecho muy poco progreso. Tenemos que poner en marcha un debate en toda América Latina sobre las reformas electorales que pueden hacerse para asegurar que más mujeres sean incorporadas. La ley de cuotas es un acelerador que puede resultar crucial. [Esto significa] tener leyes de cuotas que realmente funcionen, asegurar que sean muy precisas e incluir sanciones [a su incumplimiento]. □

AMÉRICA LATINA

Países con leyes de cuotas y resultados de su aplicación en cámaras bajas o congresos unicamerales

País	Año de aprobación	Cuota actual	Representación femenina antes de la ley (%)	Representación femenina actual (%)
Argentina	1991	30 (CB y CA)	6	38.3
Bolivia	1997	30 (CB), 25 (CA)	11	16.9
Brasil	1997	30 (CB)	7	8.8
Costa Rica	1996	40	14	36.8
Ecuador	1997	50*	4	26
Honduras	2000	30	9.4	23.4
México	1996	30 (CB y CA)	17	22.6
Panamá	1997	30	8	15.3
Paraguay	1996	20 (CB y CA)	3	10
Perú	1997	30	11	29.2
Rep. Dom.	1997	33	12	19.7

CB = Cámara baja CA= Cámara alta

* Elecciones 2006

Fuente: 30 años de democracia: ¿En la cresta de la ola? Participación política de la mujer en América Latina; IDEA Internacional, 2008, disponible en <http://www.idea.int/publications>.

Biocombustibles hipotecan futuro



OLMO CALVO RODRIGUEZ/SUBS.COOP

Cultivos de soja están acaparando las tierras cultivables en Argentina.

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Noticias Aliadas

Biocombustibles: ¿Realmente viables?

Masiva producción de agrocombustibles pondría en peligro seguridad alimentaria.

Gran entusiasmo provoca en los gobiernos de los países de la región que EEUU y la Unión Europea (UE) hayan puesto la vista en el Sur para proveerse del combustible hecho a partir de alimentos y biomasa para reducir el uso de combustibles fósiles, sin mirar los impactos negativos que esta producción masiva ya está teniendo a nivel social y las amenazas que constituyen para su biodiversidad.

En cumplimiento del Protocolo de Kyoto —que obliga a las partes firmantes a reducir las emisiones de gases contaminantes originados en la quema de combustibles fósiles y otras fuentes, en un promedio de 5.2% entre los años 2008 y 2012—, la UE se ha propuesto reemplazar combustibles fósiles con 5.75% de agrocombustibles (biocombustibles producidos con cultivos alimenticios) para el 2010, y con 10% para el 2020.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que para sustituir el 10% de la demanda actual de combustibles de la UE, habría que dedicar el 70% de la superficie agrícola europea. Alemania es el mayor productor del agrodiesel (de colza y girasol) en Europa, produ-

ciendo casi 2 millones de litros, y cubre con ello apenas el 2% del consumo de diesel en su territorio, para lo cual dedica el 10% del área total cultivada. La gran necesidad en Europa implica la importación de agrocombustibles de países del Sur como son Brasil, Colombia y Nicaragua.

Con el precio internacional del petróleo por encima de los US\$100 el barril, EEUU ve en el etanol —que produce a partir del maíz— una alternativa para no reducir su consumo de energía pero sí su dependencia del crudo. Actualmente el consumo de etanol en EEUU —del que esa nación es el mayor productor— equivale al 4% de su consumo total de combustible, porcentaje que el presidente George W. Bush se ha propuesto elevar al 20% para el 2017.

Pero, al igual que Europa, EEUU tampoco tendría la superficie agrícola suficiente para cultivar el maíz y la soja necesarios.

“Si se utilizaran todas las cosechas de maíz y soja estadounidenses en la pro-

ducción de combustibles, cubrirían solamente 12% de la actual sed de gasolina [nafta] del país y 6% de su necesidad de diesel”, señala Brian Tokar en un artículo publicado el 2006 por el informativo estadounidense *CounterPunch*.

De ahí que EEUU haya puesto los ojos en Brasil, que tiene más de tres décadas de experiencia en la producción de etanol a partir de la caña de azúcar —juntos representan el 70% de la producción mundial de ese combustible—, y en marzo del 2007 arribara con el país sudamericano a un acuerdo de cooperación bilateral para crear un mercado internacional del alcohol carburante, fomentando la producción de etanol en otros países de América Central y el Caribe, y también de África.

Satisfacer demanda del Norte

La creación de un mercado abierto y dinámico para importaciones y exportaciones de etanol a través del hemisferio es vista por varios de los gobiernos de América Latina y el Caribe como una oportunidad para tener una nueva exportación energética que generaría empleos, atraería inversión a las zonas rurales y fortalecería sus lazos económicos con EEUU y Europa.

Para promover la producción de agrocombustibles en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay se han legislado y otorgado políticas con ese fin.

También, en cumplimiento del Protocolo de Kyoto, esos y otros países de la región han establecido el uso obligatorio de un porcentaje de biocombustibles en su mercado. En el Perú, a partir del 1 de enero del 2009 será obligatoria la mezcla del diesel con el biodiesel en 2%, y la mezcla al 5% a partir del 2011, lo que creará demanda de agrocombustibles a nivel local.

Se calcula que la producción anual de etanol a partir de caña de azúcar en Brasil, que actualmente alcanza más de 15 millones de litros, casi se triplicará para el 2016, en gran parte para atender la demanda internacional.

Brasil tiene una gran ventaja: el costo de generar agro-

combustibles en sus tierras equivale a un tercio menos que en EEUU y la mitad de su valor en la UE. Así lo indica el estudio "Oportunidades y riesgos de la bioenergía" elaborado en el 2007 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En febrero del 2007, Nicaragua se sumó a la exclusiva lista de países que exportan etanol, encabezada por Brasil y EEUU, al enviar su primer embarque hacia el mercado de Europa, equivalente a tres millones de litros, con un valor que asciende a \$3 millones aproximadamente.

En el Perú, la compañía Maple Energy, con sede en Dallas, EEUU, tiene uno de los proyectos de etanol más ambiciosos después de Brasil, con planes de sembrar caña de azúcar en el norteño departamento costero de Piura. La compañía, piensa desarrollar 8,000 Ha de tierras baldías para empezar a producir etanol de caña de azúcar a fin de exportarlo a EEUU y Europa en el 2009.

Amenazas por doquier

"Aunque esto se presenta como una oportunidad para las economías del sur, la realidad ha demostrado que los monocultivos para biocarburantes, como la palmera de aceite, la soya, la caña de azúcar y el maíz, conducen a una mayor destrucción de la biodiversidad y del sustento de la población rural, y esto mina aún más la seguridad alimentaria y provoca graves impactos sobre las aguas, los suelos y el clima regional", señalaron más de 200 representantes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales en una carta abierta dirigida en enero del 2007 a la UE.

Así como esta carta, son numerosas las voces que se alzan para advertir sobre las amenazas que los agrocombustibles representan para el medio ambiente y las poblaciones de los países más pobres.

"El gran problema de producir etanol en la costa [del Perú] es que las tierras y el agua son limitadas y dedicar gran parte de estas tierras a este tipo de cultivo implica desplazar a los pequeños agricultores (...). Los cultivos de caña de azúcar requieren bastante agua", dijo el economista peruano Pedro Francke en entrevista con el diario *La República*.

Una hectárea de palma aceitera consume al menos 4,753 litros de agua. En un año, las más de 300,000 Ha de palma en Colombia habrán gastado más de 525 millardos de litros de agua, indica la revista *Biodiversidad, sustento y culturas*. "Esa agua podría abastecer a casi la mitad de la población de Colombia durante 50 días en vez de destinarla a alimentar a los autos", añade.

Numerosos estudios señalan que los biocombustibles pueden ser mucho más contaminantes que los hidrocarburos y pueden requerir mucho más energía que la que producen.

El etanol celulósico hecho a partir de pastos en EEUU produce 50% más emisiones de gases de efecto invernadero que la gasolina, indica un estudio publicado en la revista *Science*. El etanol producido con maíz requiere un 29% más de energía proveniente de los fósiles que la que produce; el biodiesel producido con soja requiere un 27% más y el biodiesel producido con girasoles un 118% más.

Para que la producción de agrocarburos sea rentable se requiere utilizar métodos agrícolas intensivos, lo que implica el uso también intensivo de fertilizantes y pesticidas. La producción a gran escala exige grandes extensiones de tierra para cultivar lo que, en muchos casos, está llevando a sustituir

"Los precios de los productos agrícolas aumentarán entre un 20% y 50% en los próximos 10 años debido al rápido crecimiento del sector de biocombustibles".

— Informe OCDE-FAO



Greenpeace propone establecer un estándar de calidad que, entre otras cosas, obligue a que en el análisis del ciclo de vida de los biocombustibles se genere una reducción de gases de efecto invernadero de al menos un 60% comparados con el combustible que reemplazan.

El mayor uso de alimentos para la producción de combustible también está trayendo consigo el alza de sus precios —al convertirlos en materia prima y reducir sus existencias—, como ha sucedido con el maíz en Guatemala y México.

"Los precios de los productos agrícolas, en particular los granos y los lácteos, aumentarán entre un 20% y 50% en los próximos 10 años debido al rápido crecimiento del sector de biocombustibles", advierte un informe de la OCDE y la FAO publicado el año pasado.

Decididamente la producción de agrocarburos compete con la producción de alimentos, lo que constituye una amenaza para la soberanía alimentaria de las poblaciones de la región. Además, una mayor producción de agrocombustibles se traduce en mayor producción de soja y maíz transgénicos.

Reducir demanda de combustibles

Son numerosas las voces que se alzan para advertir sobre los riesgos que esta carrera por la producción masiva de agrocombustibles acarrea al medio ambiente y al bienestar de las poblaciones.

"Los agrocombustibles pueden suponer parte de la solución a escala local, valorizando residuos como aceites usados, o en ciertos cultivos en zonas determinadas donde se cumplan criterios de sostenibilidad. Pero no tiene sentido si no es dentro de una propuesta basada en la reducción de la demanda de combustibles", señala la organización internacional Amigos de la Tierra.

Para ello se requiere reducir el consumo energético, poner freno al estilo de vida consumista, promover el transporte público, orientar la agricultura al mercado interno, desarrollar la agricultura ecológica local, alentar enfoques de desarrollo económico sustentables a nivel ambiental y social. □

SITIOS WEB DE INTERÉS

Biodiversidad en América Latina <http://www.biodiversidadla.org/>
CLAES D3E <http://www.agrocombustibles.org/>
GRAIN <http://www.grain.org/biodiversidad/>
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales <http://www.wrm.org.uy/inicio.html>
Programa de las Américas <http://www.ircamericas.org/esp/4559>

Líder en producción de etanol

País posee condiciones para ampliar producción de biocombustibles.



Trabajadores de plantación de caña de azúcar recogen la cosecha del próximo año en Brasil.

© BANCO MUNDIAL / CELIO MESSIA

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, visitó en marzo en Brasil al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y defendió el incremento de una actuación conjunta en diversos temas de interés global, como la lucha contra el calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero.

“Con el papel de liderazgo de Brasil en la cuestión de los biocombustibles, estamos trabajando juntos para garantizar que los biocombustibles sean sustentables, sean buenos para el ambiente, sean buenos para reducir los gases con efecto invernadero y, por tanto, para garantizar la calidad de vida de nuestro planeta”, dijo el presidente de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea.

La visita de Barroso para tratar entre otras cuestiones una probable asociación entre Brasil y Europa en biocombustibles, es apenas una de entre las varias acciones que el gobierno brasileño viene promoviendo con miras a convertir al país en potencia mundial del sector. Comenzando, obviamente, con el etanol, combustible renovable del que Brasil ya es líder mundial.

Disponibilidad de área agrícola, clima favorable y agua en abundancia —el país posee el 12.5% de las reservas mundiales de agua dulce (NA, Oct. 31, 2007)—, condiciones efectivamente no faltan para que Brasil amplíe su producción de biocombustibles, incluyendo el etanol, contribuyendo al esfuerzo mundial de prevención y mitigación del calentamiento global con la sustitución de combustibles que generan gases de efecto invernadero.

Tres décadas de experiencia

Brasil lidera la producción de etanol a base de caña de azúcar gracias a una infraestructura que empezó a montarse en los años 70 (NA, Mayo 2, 2007). Dos años después de la crisis del petróleo de 1973 que disparó los precios del combustible, el gobierno militar (1964-85) lanzó el Programa Nacional de Alcohol para incentivar la producción de alcohol anhidro derivado de la caña, que podría ser adicionado cada vez más a la gasolina, y también de alcohol etílico hidratado (o etanol), para ser usado en vehículos con motores desarrollados en función de este combustible.

En 1975 la producción de alcohol en Brasil era de 700 millones de litros. Más de tres décadas después, el país ya produce más de 15 millardos de litros anuales (de los 25 millardos de litros anuales usados con fines energéticos en todo el planeta), con un parque formado por más de 350 fábricas de alcohol, y cuyo número sigue creciendo.

Los derivados de la caña representan ya casi 14% de la matriz energética brasileña y 17% de la matriz de combustibles vehiculares, contra 54.5% del petróleo diesel —el

principal combustible de la flota de camiones— y 25% de la gasolina pura. El 3% restante es gas natural vehicular.

Asimismo, Brasil ha desarrollado la tecnología del combustible flexible, que permite que un vehículo pueda utilizar tanto gasolina como etanol. En el 2005 los automóviles con esa tecnología representaron 53% de las ventas en el país, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores.

El espectacular incremento de la producción de etanol se debe, entre otros factores, al crecimiento del área plantada con caña de azúcar. Actualmente hay más de 6 millones de hectáreas plantadas con caña de azúcar, correspondiendo al estado de São Paulo el área principal, con más de 60%, concentrando también la mayor parte de las fábricas que procesan la caña para producir etanol.

Medio ambiente y seguridad alimentaria

Pero existe el temor de que el creciente aumento de áreas plantadas con caña de azúcar en otros estados brasileños pueda llevar a la deforestación de bosques nativos o a la sustitución de áreas sembradas originalmente con alimentos.

“Si se hiciera de la forma correcta, no hay problema con el cultivo de caña. Brasil produce muchos alimentos; lo que no existe es el poder adquisitivo suficiente, y por eso es fundamental ampliar las políticas sociales de ampliación de generación de ingresos y reducción de las desigualdades”, sostiene Evaristo Eduardo Miranda, jefe de Embrapa Monitoreo por Satélite, unidad de la estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa).

Miranda, uno de los expertos en etanol en el país, piensa que lo que falta en Brasil es “mayor coordinación y articulación” en la política de expansión del etanol, de forma sustentable. Si eso ocurriese, de forma planificada, el país podría realmente llegar a ser una gran potencia en energía renovable, contribuyendo a los esfuerzos mundiales por reducir los gases de efecto invernadero. Miranda hace ver que Brasil tiene 200 millones de hectáreas de pastizales, donde de hecho la caña se está expandiendo.

Pero todo cuidado es poco, como recuerdan ambientalistas y otros grupos de la sociedad. El concejal Euclides Buzetto, del gubernamental Partido de los Trabajadores, observa que es fundamental, por ejemplo, acabar con la práctica de las quemas, todavía muy utilizada en las plantaciones de caña de azúcar para facilitar las zafras.

“Debemos insistir con el gobierno para que firme acuerdos con todos los fabricantes, para que asuman compromisos con la agricultura sustentable, sin aumentar las quemas, tan perjudiciales al ambiente y a los seres vivos. Y, además de eso, para que reserven de hecho, y en gran extensión, un porcentaje del área cañera para el cultivo de cereales básicos, para alimentar a nuestro pueblo, con precios accesibles como está ocurriendo en los últimos años”, sostiene este concejal de la ciudad de Piracicaba, en el interior de São Paulo, uno de los principales polos del etanol y de otros biocombustibles en Brasil. □

Principales cultivos utilizados en América Latina y el Caribe

- Caña de azúcar (bioetanol)
- Soja (biodiésel)

También:

- Palma aceitera, maíz, colza, girasol, sorgo, trigo, mandioca, entre otros.

ARGENTINA

Hernán Scandizzo desde Buenos Aires

Biocombustibles acaparan tierras

Aumenta exponencialmente producción de soja para satisfacer mercados externos.

“La demanda externa de biodiesel va a generar una fuerte presión para sojizar la superficie destinada a los cultivos, provocando la sustitución de otros cultivos, por la rentabilidad que tiene, y destruyendo los bosques nativos que quedan”, alertó María Eugenia Testa, de Greenpeace Argentina, al periódico *Página/12*.

Y las cifras lo corroboran. En 1997 se cosecharon en Argentina 11 millones de toneladas de soja en 6 millones de hectáreas; en el 2007 la cosecha llegó a 47 millones de toneladas en 16.6 millones de Has.

El país es el segundo productor mundial de esa oleaginosa, después de EEUU, y el primer exportador de aceite. La soja constituye ya el 60% de la producción agrícola del país: su cultivo desplazó a la ganadería y reemplazó al trigo, maíz, girasol, lentejas y arvejas, entre otros.

En el 2006 se exportaron desde los puertos argentinos 4,958 TM de biodiesel a un valor de US\$4.5 millones, mientras que en el 2007 salieron 319,093 TM por un monto de \$268 millones.

Según la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, las ocho empresas que exportan biodiesel totalizan una capacidad de producción de 600,000 TM anuales. En el transcurso de este año se sumarán siete plantas, elevando la capacidad a 1.7 millones de toneladas, y se estima que las exportaciones en el 2008 asciendan a 1.1 millones de toneladas.

Al crecimiento exponencial de la producción de biocombustibles para satisfacer mercados externos se suman las necesidades internas. La ley 26.093 sancionada en mayo del 2006 otorga ventajas fiscales a los productores de estos carburantes y establece que a partir del 2010 el gasoil comercializado en el país tendrá como mínimo un 5% de componente “bio”.

Caña de azúcar y jatrofa

La soja no es el único cultivo atado a los biocombustibles. La provincia de Tucumán, en el centro norte, promociona la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar.

En El Impenetrable —nombre con que se conoce al monte cerrado de 40,000 km² en la nororiental provincia del Chaco—, la obtención de biodiesel a partir de la jatrofa, arbusto con propiedades medicinales nativo de América Central con cuyas semillas no co-

mestibles se puede producir aceite, es presentada por empresarios, con aval gubernamental, como una alternativa para producir “combustibles amigables” con el medio ambiente y generar puestos de trabajo para las comunidades indígenas.

Pero la agroindustria no sólo apunta al centro y norte argentino; también mira a la Patagonia. Los inversionistas encuentran allí vastas extensiones de tierras, disponibilidad de agua y puertos que miran al Atlántico.

En el valle del Río Negro, de tradicional producción frutihortícola bajo riego, se evalúan proyectos para cultivo de soja, colza y cártamo para producir biodiesel. En tanto, el gobierno de Chubut invirtió en el 2007 en la obtención de biodiesel a partir de algas, incorporando el mar al mercado de los biocombustibles.

Pérdida de bosques

Según Greenpeace Argentina, “en los últimos nueve años más de 2 millones de hectáreas de bosque han desaparecido en manos de las actividades agropecuarias especialmente motorizadas por el cultivo de soja”.

En diciembre del 2007, luego de constantes postergaciones en el Parlamento —adjudicadas al cabildeo sojero—, se promulgó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La norma establece una moratoria tope de un año para que las provincias propietarias de los recursos naturales realicen un reordenamiento territorial para determinar usos (agrícola, ganadero, silvícola, área protegida, entre otros), paso previo para la autorización de nuevos desmontes.

La lucha por la conservación del bosque nativo tuvo dos hitos el año pasado: la determinación del pueblo wichi en Salta, noroeste del país, para frenar la destrucción de su territorio, y la crisis sanitaria y alimentaria desatada en la provincia nororiental del Chaco —que golpeó duramente al pueblo toba-qom y a lo largo del 2007 se cobró al menos 21 vidas—, según documentó la organización de derechos humanos local Centro Nelson Mandela.

El avance de la frontera sojera en el Chaco aceleró la tala y quema de El Impenetrable, que proveía alimento y medicina a ese pueblo, y sustituyó cultivos como el algodón, cuya cosecha significaba un ingreso para las familias indígenas.

De la mano de los agronegocios en el centro y norte del país se profundizó un proceso de expulsión de comunidades indígenas y campesinas. Ese fue uno de los detonantes para la promulgación en noviembre del 2006 de la Ley 26.160 de emergencia en la posesión y propiedad indígena. La norma frena por cuatro años los desalojos, lapso en que se deberá realizar un relevamiento y regularización territorial con participación de las comunidades afectadas.

Ambas normas llevaron alivio en la coyuntura pero el interrogante es qué pasará cuando se cumplan sus plazos de aplicación. □

• Para llenar el tanque de un automóvil (50 litros) que funcione con biocarburante, se requieren aproximadamente 200 kilos de maíz, cantidad que permite alimentar a una persona durante un año.

• Unas 10 Ha de cultivos alimenticios proporcionan medios de subsistencia a un promedio de entre siete y 10 agricultores, mientras que la misma superficie destinada a la caña de azúcar permite sólo un empleo.

—Jean Ziegler, relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación.

Tregua a conflicto agrario

Agricultores deciden levantar paro y negociar con gobierno.

PERÚ

Militares condenados. Apenas entre 15 y 35 años de cárcel fueron condenados cuatro ex militares, integrantes del escuadrón de la muerte conocido como "Grupo Colina", por el asesinato en 1992 de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación de La Cantuta, en Lima.

El general en retiro Julio Salazar, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, recibió 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado y desaparición forzada, mientras que a los ex agentes militares Fernando Lecca, José Alarcón y Orlando Vera, se les aplicó una pena de 15 años de cárcel por su participación en el secuestro, tortura, asesinato e incineración del profesor y los estudiantes.

El fallo, considerado "histórico" por familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, sienta un precedente para el juicio al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), acusado de haber dado luz verde a las matanzas del Grupo Colina (*NA, Feb. 6, 2008*).

Miguel Jugo, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), manifestó que la sentencia "reconoce que las violaciones a los derechos humanos no se aplicaron de forma aislada, sino de modo sistemático y en forma permanente" por el gobierno de Fujimori. —NA.

Miles de agricultores argentinos decidieron en asamblea el 2 de abril suspender por un mes el paro que iniciaron 21 días antes contra un aumento impositivo y que desabasteció de alimentos a las ciudades.

Cerca de 20,000 productores agropecuarios y sus familias, con banderas argentinas y carteles con el nombre de sus pueblos, lo resolvieron reunidos en las afueras de la ciudad de Gualeguaychú, 270 km al norte de Buenos Aires, en la oriental provincia de Entre Ríos.

"Suspendemos el paro por un término no mayor de 30 días", anunció Mario Llambías, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que junto con la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Sociedad Rural y la Federación Agraria Argentina (FAA), representan a unos 290,000 pequeños, medianos y grandes productores rurales.

La asamblea de agricultores fue la contracara del acto convocado en la víspera por el gobierno en la céntrica Plaza de Mayo, al que asistieron unas 200,000 personas.

"Les pido que me ayuden a seguir luchando por la justicia, por el trabajo, para conformar un empresariado nacional que agregue valor a la producción con más y mejor trabajo, con la educación como instrumento de equilibrio social, porque sola no puedo", dijo la presidenta Cristina Fernández a la multitud.

¿Redistribuir o hacer caja?

La crisis comenzó el 11 de marzo, cuando el gobierno aumentó el impuesto a las exportaciones de soja y girasol mediante una retención móvil que puede subir o bajar de acuerdo con los precios internacionales. En el caso de la soja, el principal cultivo de exportación, el tributo ascendió de 35% a 44%, mientras que el del girasol subió de 39% a 41%.

Aunque el gobierno sostiene que se trata de una medida redistributiva sobre una renta extraordinaria atribuida a los elevados precios de esos productos en el mercado internacional, y la intención es corregir el desequilibrio y promover otros cultivos, lo cierto es que las arcas fiscales captan poco menos de la mitad de los US\$24 millardos anuales de ingresos que tiene este rubro.

Para Néstor Scibona, columnista del diario *La Nación*, más que una política redistributiva con fines sociales, las retenciones tienen que ver con "hacer caja" para asegurar los recursos fiscales que le permitan atender los vencimientos externos de la deuda pública y "pagar las fuertes importaciones de combustibles pesados y gasto, así como alimentar el barril sin fondo de los subsidios que se aplican para camuflar el déficit energético".

La decisión provocó el rechazo unánime de productores pequeños, medianos y grandes que exigen incentivos en forma de subsidios y créditos. Dos días después resolvieron bloquear rutas y, con apoyo desde las

ciudades, la protesta se consolidó. Miles de personas de barrios altos y medios salieron espontáneamente a las calles a golpear cañerías en respaldo a los agricultores.

Productores de granos, oleaginosas, leche, carne y otros ítems agropecuarios bloquearon 400 puntos en las carreteras del interior del país impidiendo el tránsito de camiones con alimentos.

Las ciudades quedaron desabastecidas. Millones de litros de leche se perdieron y toneladas de tomates, zanahorias, bananas y naranjas se pudrieron en los camiones. La carne vacuna desapareció de los mercados y millones de pollos pequeños debieron ser sacrificados.

Concentración de la tierra

Informes periodísticos afirman que el fondo del conflicto es la creciente concentración de la tierra en pocas manos —grandes terratenientes y conglomerados financieros— y la tendencia hacia el monocultivo (*NA, Jun. 2, 2004*). El 20% de los 84,000 productores de soja posee el 80% de los cultivos y, de los 30 millones de hectáreas cultivables en el país, 50% se dedican a esta oleaginosa. A esto se suma que el 95% de la soja argentina se exporta.

Debido a que el incremento de los impuestos afecta fundamentalmente a los pequeños y medianos productores, porque reduce su limitado margen de ganancias, el gobierno decidió el 31 de marzo otorgarles una serie de compensaciones, incluyendo reembolsos y subsidios al transporte de carga para establecimientos alejados de los puertos, con lo cual "volverán a estar en la misma situación de antes", dijo el ministro de Economía, Martín Loustean.

Estas medidas beneficiarán a unos 62,500 productores (80%), mientras que el resto deberá pagar el aumento de los impuestos.

Danilo Lima, analista de *El Diario de Entre Ríos*, opinó que "el esquema de retenciones móviles, en realidad, le pone un 'techo' a la rentabilidad de los productores, es decir, les impide ganar más. Como los costos no paran de crecer —semillas, impuestos, fertilizantes, agroquímicos, gasoil, etc.—, al pequeño y mediano chacarero [agricultor] no le queda otra que arrendar su campo y, después, vendérselo al grande. Se pierde, entonces, un productor genuino y la tierra se concentra en menos manos".

Los productores rurales reunidos en Gualeguaychú —que ha protagonizado masivas movilizaciones contra la instalación de una planta para producir pasta de celulosa en la vecina ciudad uruguaya de Fray Bentos (*NA, Ago. 10, 2005 y Jun. 14, 2006*)— anunciaron que darán una tregua de un mes al gobierno para discutir una agenda con las autoridades.

"Vamos a analizar una agenda. Y queremos soluciones, no promesas. No nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir presionando y buscando las soluciones que precisamos. No queremos que pasen 30 días y volvamos con las manos vacías, si no, vamos a volver a las rutas", advirtió Llambías.

El paro dejó pérdidas de alrededor de US\$2 millardos, según estimaciones empresariales. □

- Una corte penal en **Argentina** condenó el 4 de abril a María Cristina Gómez y Osvaldo Rivas a 8 y 7 años de prisión, respectivamente, por haberse apoderado ilegalmente de María Eugenia Sampallo Barragán, hija de desaparecidos, días después de su nacimiento en 1978. Sampallo había solicitado 25 años de cárcel para sus apropiadores.

- En 10% aumentó la violencia familiar en el 2007 en La Paz, **Bolivia**, en relación al año anterior. La Brigada de Protección de la Familia de La Paz atendió el año pasado 13,829 casos de violencia.

- El gobierno de **Brasil** anunció a fines de marzo la reanudación de la construcción de una torre de lanzamiento de cohetes y satélites en el centro espacial de Alcântara, en el noreste estado de Maranhão. Se calcula que la obra costará US\$17.6 millones.

- Cuatro senadores y un diputado fueron detenidos en **Colombia** la primera semana de abril por sospecha de vínculos con paramilitares. Con el arresto de Luis Fernando Velasco, Miguel Pinedo Vidal, Guillermo Gaviria, Humberto Builes y Alonso de Jesús Ramírez ya son 28 los legisladores presos —en su mayoría aliados del presidente Álvaro Uribe— por sus presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

- Un informe pericial estimó en US\$16 millardos el monto que tendría que pagar la petrolera estadounidense Chevron (antes ChevronTexaco) por los daños ambientales y a la salud causados durante sus operaciones en **Ecuador** entre 1972 y 1990. Desde el 2003 la empresa enfrenta un juicio en la ciudad de Lago Agrio por contaminación.

BOLIVIA

Martin Garat desde La Paz

Corrupción, ¿mal endémico?

Desfalcos y malversaciones son comunes en administración pública y privada.

“En Bolivia, la corrupción es sistémica. Hay una tendencia a ‘hacer trampa’ en casi todas las actividades dentro y fuera del Estado”, explica Guadalupe Cajías, ex delegada presidencial de lucha contra la corrupción y ahora representante de la Movida Ciudadana Anticorrupción (MCA).

Los ejemplos de “trampas” son innumerables y muchas veces sorprendentes.

“En la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad pública en La Paz [Universidad Mayor de San Andrés] hubo un desfalco de US\$500,000. Los culpables eran personas que supuestamente tenían valores revolucionarios. Pero la malversación de dinero tiene lugar incluso en actividades tales como las juntas vecinales, por ejemplo. Los miembros aportan dinero, pero nadie exige rendiciones de cuentas al presidente de la junta. De esta manera, el presidente puede lucrarse gracias a su cargo”, cuenta Cajías.

También es común el pago de “coimas” o sobornos en la administración pública y en escuelas y universidades.

“Hay madres en El Alto [ciudad vecina a La Paz y la más pobre de Bolivia] que sobornan a los profesores para que aprueben a sus hijos en los exámenes de las escuelas normales, donde se forman los maestros de la enseñanza básica. En las universidades, hay docentes que cobran a los estudiantes para no aplazarlos e incluso piden favores sexuales a las mujeres”, dice Cajías.

Tráfico de influencias

Otros tipos de corrupción que son muy comunes son el nepotismo y el tráfico de influencias. Por relaciones de parentesco, amistad o afinidad política, personas que carecen de la formación adecuada reciben puestos en la administración pública.

Sin embargo, no siempre es fácil determinar qué es corrupción y qué no.

“En los pequeños municipios del altiplano, los alcaldes a menudo se preguntan: ‘¿Por qué no voy a contratar a mi primo, si yo sólo confío en él?’ En un pueblo de la Amazonia, el alcalde compraba ladrillos para el municipio de su propia fábrica de ladrillos. Le dijimos que eso no estaba bien. Más tarde supimos que la fábrica del alcalde era la única en toda la región. Bolivia es un país pequeño y todos nos conocemos, aquí no existe el factor anonimidad”, explica Cajías.

La ex delegada presidencial considera que hay varios factores en la sociedad que facilitan e incluso fomentan la corrupción.

“Pedimos al ‘papá Estado’ que solucio-

ne nuestros problemas, pero consideramos al Estado como algo ajeno. Robar al Estado no es percibido como un robo a la sociedad, es decir, a los demás. Y la lealtad hacia amigos y parientes también es un obstáculo en la lucha anticorrupción. Aquel que hace una denuncia es considerado un traidor”, sostiene.

En el 2006 fue creado el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, iniciativa que partió del presidente Evo Morales, que había destacado el combate a la corrupción como tema prioritario durante su campaña presidencial.

La viceministra Nardy Suño es tajante a la hora de hablar de posible corrupción en el seno del gobierno: “Tengo un mandato muy claro del presidente de denunciar la corrupción. Si se trata de un funcionario público o de un miembro del Movimiento Al Socialismo [MAS, el partido oficialista], la denuncia es más importante aún, porque ese individuo traiciona el proceso de cambio en el país”, dice.

Entre otras medidas, el viceministerio busca fomentar el control social sobre la administración pública. Suño pone como ejemplo el trabajo realizado en la entidad responsable de la red vial.

“Invitamos a las actores sociales y económicos a trabajar conjuntamente: la Cámara de Constructores, la Cámara de Transportistas y las organizaciones campesinas. Juntos lograron acuerdos para concesionar la construcción de caminos a empresas privadas de manera transparente. Hubo un control social efectivo”, dice.

La ministra asegura que ha disminuido la corrupción durante el gobierno de Morales y que “ya no se tapan los delitos, ahora se denuncian”.

Suño afirma que su viceministerio está investigando más de 43 casos que involucran a funcionarios de la actual gestión.

Sin embargo, Cajías no comparte el optimismo de Suño.

“El presidente está sinceramente convencido de la importancia de este tema. Pero en los niveles inferiores el control interno falla”, afirma.

En anteriores gobiernos los funcionarios de la Contraloría tenían un perfil altamente técnico, según Cajías, pero sospecha que ahora “son reclutados sobre la base del amiguismo y las afinidades políticas. Los nuevos funcionarios no reciben capacitación en anticorrupción”.

Cambiar los valores de una sociedad es una tarea complicada, dice Flavia Kantuta, integrante de la Red Universitaria Anticorrupción (RUA). “Yo creo que el cambio está en las nuevas generaciones. Se puede enseñar a los niños y adolescentes de hoy a no ser corruptos en el futuro. Pero creo que es muy difícil cambiar la mentalidad de los adultos”. □

VIH gana batalla

Municipios alejados son los más afectados por centralización de atención.

A mitad de la conversación se le quebró la voz. Se le volvió más aguda y llena de dolor e indignación. Delia, nombre ficticio, contó que el día que fue al hospital con su esposo, el doctor le dijo que él tenía sólo 20 días de vida y que ella y sus dos hijos también iban a morir pronto de sida. Su esposo falleció, pero ahora, seis años después, ella disfruta cada instante con sus dos hijos.

Según datos oficiales, se estima que alrededor de 100,000 personas viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en

Guatemala. Además, cada año se producen más de 4,000 muertes vinculadas al sida, cantidad similar a las víctimas diarias por violencia en el país.

Al igual que en otros países de América Central, no se tienen cifras del avance de la epidemia más allá de la capital; sin embargo, datos disponibles indican el aumento de personas que viven con el virus del sida (PVVS) entre la población indígena.

Según el informe "Situación de la epidemia de sida 2006" elaborado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), en el 2004 los ladinos (mestizos) representaban el 74% de los casos y los indígenas el 22%. Un año después, los ladinos constituyeron el 69% y los indígenas el 28%.

Grandes dificultades

Delia vive en el suroccidental departamento de Retalhuleu, a más de cuatro horas de viaje de la capital. Ella pertenece a un grupo de apoyo mutuo y explica que la mayor dificultad es cubrir los pasajes para que las PVVS se dirijan al hospital donde acuden a sus consultas o reciben sus medicamentos antirretrovirales que se encuentran en Ciudad de Guatemala, la capital, en Coatepeque o Quetzaltenango —al norte de Retalhuleu—, todas muy alejadas de su localidad.

"Lo que hacemos en el grupo son rifas relámpago para las personas que lo necesitan, ya que hay bastante gente en extrema pobreza. Hay pacientes que llegan a dormir la noche anterior y van a su cita en la madrugada, haciendo cola desde las tres de la mañana", dice Delia.

Este es el mayor problema en los departamentos alejados. Por ejemplo, los pobla-

dores del Petén, en el extremo nororiental, deben gastar cerca de US\$130 para acudir a su cita médica, y son familias cuyos ingresos son de menos de \$100 mensuales.

Lídice López Tocón, de la Asociación Agua Buena, organización centroamericana que lucha por el acceso al tratamiento antirretroviral para las PVVS, refiere que existen diversas barreras que obstaculizan este objetivo en Guatemala, incluyendo acceso tardío al diagnóstico.

Indica que en el interior del país sólo hay 16 establecimientos que realizan los análisis; el acceso al tratamiento antirretroviral está centralizado y es muy difícil que la gente llegue a los lugares donde se brinda, además de los altos costos de transporte, alojamiento y alimentación; los pacientes sufren el estigma y la discriminación por parte de la población y especialmente por el personal de salud; y la diversidad de lenguas indígenas representa una gran barrera para las poblaciones que no hablan español.

Sin información ni prevención

Juan Alberto Cutz, de la Asociación Investigación, Desarrollo y Educación Integral (IDEI), afirma que lo que más afecta a la población rural e indígena es la falta de información.

"No existe un programa de prevención dirigido a estas comunidades. Difícilmente se encuentra alguna información de salud, cualquiera que esta sea; por eso se sabe muy poco de lo que es el VIH en estos poblados", dice. "Además, cuando a alguna persona se le presenta una enfermedad oportunista nunca le prestan atención y no van a un puesto de salud porque generalmente son tratados con la medicina tradicional, y sólo cuando ésta no tiene éxito se trasladan a un centro de salud. En algunos casos, cuando logran llegar a un hospital, lo hacen ya en etapa sida. Actualmente hay más de 300 personas recibiendo medicamentos en la clínica de Quetzaltenango; el 50% proviene del área urbana y el 50% restante de área rural".

Dee Smith, coordinadora del Proyecto Vida en Coatepeque, explica que en las localidades "el gobierno no ha tenido un plan sistemático para fortalecer centros y puestos de salud en atención a personas con VIH para reducir la distancia entre servicios y las personas; tampoco hay una proyección real de la demanda de medicamentos en las zonas alejadas. Además, el gobierno no quiere presupuestar suficiente recursos económicos para la compra de medicina esencial y sigue dependiendo del Fondo Mundial [de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria], para evitar asumir más responsabilidad".

Si bien el Estado ha implementado algunas respuestas y acciones, éstas reflejan el compromiso de apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Por ejemplo, de los \$12 millones que se necesitan para poder echar a andar el Programa Nacional de Sida, que se encargaría de implementar las actividades necesarias para atender el problema del VIH en Guatemala, sólo se aprobaron \$5.6 millones. □



"Bríndales una mano a las personas con VIH": marcha en Ciudad de Guatemala.

Violentas protestas

Movilizaciones contra aumento de costo de vida se vuelven contra pacificadores.

Heddi Annabi, jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), abandonó Nueva York apresuradamente el 9 de abril para dirigirse a la políticamente conflictuada nación caribeña donde más de 7,000 soldados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están emplazados desde junio del 2004.

“El creciente descontento público tiene la clara posibilidad de socavar los esfuerzos de estabilización”, dijo Annabi, quien se encontraba en la ciudad estadounidense participando en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

La primera semana de abril, cuatro personas murieron en movilizaciones contra el alza del costo de vida. Los manifestantes de la localidad de Les Cayes, en el sur del país, atacaron e incendiaron establecimientos comerciales y dispararon contra los efectivos de la ONU.

Además de expresar su “preocupación” por la violencia en Haití, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, “deploró” los ataques contra el personal e instalaciones de la MINUSTAH, así como contra el gobierno haitiano y la propiedad privada. También manifestó su solidaridad “por el sufrimiento que está soportando el pueblo haitiano como consecuencia del aumento de precios de los alimentos y los combustibles”.

Para el 25 de abril se tiene prevista una reunión internacional de donantes en Port-au-Prince, la capital.

“Dividendos de la estabilidad”

Annabi urgió a los países donantes y el sector privado trabajar junto con las autoridades haitianas para encontrar formas creativas de generar lo que llamó “dividendos de la estabilidad”, que proporcionarían mejoras inmediatas y tangibles en las condiciones socioeconómicas.

Esto, dijo, incluiría ayuda humanitaria urgente seguida por

ayuda agrícola de largo plazo para incrementar el rendimiento de los cultivos.

En un informe de 19 páginas presentado al Consejo de Seguridad, Ban precisó que sigue siendo urgente enfrentar las privaciones que sufre la población haitiana, de la que 76% vive con menos de US\$2 diarios.

“La débil capacidad adquisitiva continúa siendo una preocupación constante en relación con los productos básicos diarios y los bienes importados, que representan alrededor de 60% de los productos disponibles en el mercado”.

Además, el reciente incremento de los precios de productos tales como harina, arroz y aceite de cocina ha llevado a un mayor sufrimiento, mientras que el acceso a los servicios sociales básicos (salud, educación y agua potable) continúa siendo limitado.

“La continua persistencia de la extrema pobreza en zonas rurales es un factor importante en el rápido crecimiento de la población urbana”, agregó el informe.

Actualmente, Haití está ubicado en el puesto 146 de los 177 países incluidos en el Índice de Desarrollo Humano que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora anualmente. Haití también está ubicado entre los 50 países menos desarrollados del mundo, es decir, los más pobres de los pobres del mundo.

El informe de la ONU también precisa que el gobierno haitiano ha continuado con sus esfuerzos para llegar a los grupos políticos y fortalecer las instituciones estatales.

“Sin embargo, la situación política continúa siendo frágil dadas las continuas divisiones políticas y las débiles instituciones estatales, así como la ausencia de cualquier mejora significativa en las difíciles condiciones de vida de gran parte de la población”, agrega.

Dirigiéndose al Consejo de Seguridad el 8 de abril, Annabi manifestó que si bien se ha producido algún avance en la reforma institucional en los últimos seis meses, falta mucho todavía por hacer para alcanzar las metas. Dijo que aunque actualmente hay 8,450 policías en servicio, la cifra está muy por debajo de los 14,000 que se necesitan para las tareas policiales básicas.

Annabi aplaudió la aprobación de tres importantes leyes sobre la judicatura y el sistema penal, pero precisó que “serían esenciales los esfuerzos continuos y coordinados para convertir estos proyectos en realidad”. □

Noticias Aliadas, edición impresa, ofrece información y análisis sobre el acontecer de América Latina y el Caribe con énfasis en los temas que afectan a las poblaciones excluidas de la región. Versión en inglés: Latinamerica.Press.

Producido por **COMUNICACIONES ALIADAS**, organización no gubernamental con sede en Lima, Perú, que por más de 40 años produce información y análisis independiente y confiable. Nuestro objetivo es visibilizar los problemas y situaciones que transgreden los derechos humanos de las poblaciones excluidas y menos favorecidas de América Latina y el Caribe.

Directora ejecutiva: Raquel Gargatte Loarte

Directora de prensa: Elsa Chanduvi Jaña
(echanduvi@comunicacionesaliadas.org)

Editoras: Cecilia Remón Arnáiz, Leslie Josephs

Editor gráfico: William Chico Colugna

Impresión: Ediciones Atenea E.I.R.L., Jr. Carlos Gonzales 252, Lima 32, Perú (511) 242 8263

Comunicaciones Aliadas

Jirón Olavegoya 1868, Lima 11, Perú
(511)2659014 Fax:(511)2659186

info@comunicacionesaliadas.org

www.noticiasaliadas.org

www.latinamericapress.org (en inglés)

Además de nuestra edición impresa, ofrecemos recursos electrónicos y en línea, así como informes especiales y servicios informativos gratuitos por e-mail.

Para información de servicios y productos, contactarse con Patricia Díaz, Responsable de Mercadeo, a pdiaz@comunicacionesaliadas.org

na **noticias aliadas**

APARTADO 18-0964, LIMA 18, PERÚ

Noticias Aliadas es una asociación sin fines de lucro, con Registro Civil N° 646, Asiento A-1 (Art. 33°, D.L. 20680). Hecho el depósito legal N° 99-4052.

Printed Matter
IMPRESOS